

Resistencia civil en defensa del territorio

El conflicto armado y social que sufre Colombia se remonta más allá de la aparición de las actuales guerrillas en la pasada década de los años sesenta y tiene entre sus causas fundamentales el control territorial y la posesión de las riquezas naturales que abundan en el país.

PACO SIMÓN

Hay un refrán colombiano que dice que "cuando dos elefantes pelean sobre el pasto"; aquí, el pasto, la hierba, es también el objeto de la pelea. El largo proceso de usurpación de tierras a los pequeños propietarios (campesinos, indígenas y afrocolombianos) ha sido ejecutado por las grandes familias que crearon sus escuadrones de la muerte con el supuesto objetivo de defenderse de las agresiones de la guerrilla, pero con la verdadera intención de extender sus propiedades al cultivo de la coca. Así surgieron los actuales grupos paramilitares o autodefensas que, actuando conjuntamente con la Fuerza Pública, son responsables de más de 15.000 casos de asesinatos, desapariciones y torturas y de la inmensa mayoría de los tres millones de personas desplazadas por la fuerza de su territorio a los que se calcula que les han arrebatado unos cinco millones de hectáreas. Y mientras los desplazados se hacían en las grandes urbes, se ha producido una desmesurada concentración de la propiedad de la tierra:

el 0,4% de los dueños de extensiones mayores de 500 hectáreas posee el 62,6% de la tierra en tanto los propietarios de menos de 20 hectáreas, representando el 86,3%, sólo controlan el 8,8%. Colombia es uno de los tres países más inequitativos de América Latina y más de veinte millones de colombianos y colombianas son pobres, lo que no ha impedido que durante el primer gobierno (2002-2006) del actual presidente Álvaro Uribe Vélez se gastaran unos 11.000 millones de euros en la guerra.

RESISTENCIA A LA GUERRA.

Ante la falta de respuesta del Estado o por la propia implicación de funcionarios públicos en los ataques, las comunidades rurales han emprendido procesos de resistencia civil frente a la guerra y en defensa de su territorio, que cuentan con el respaldo de organizaciones de defensa de los derechos humanos, como las ONG que se integran en la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Las comunidades se han declarado al margen del conflicto lo que conlleva su rechazo a colaborar con los combatientes tanto

legales como ilegales. Se niegan a llevar armas, a proporcionar información o apoyo logístico a uno y otro bando y no quieren que ninguna de las partes en el conflicto entre en sus territorios. Esta posición de neutralidad frente a la guerra -no ante las violaciones de sus derechos o ante la responsabilidad estatal en las causas y consecuencias del conflicto, que denuncian constantemente- ha sido elogiada por la comunidad internacional ya que representa una alternativa frente al modelo imperante de "estás conmigo o en contra mía". Las comunidades han sufrido ataques de los distintos grupos guerrilleros porque temen perder apoyo popular y logístico si esa actitud se imita masivamente, pero sobre todo se han convertido en un mal ejemplo para Uribe ya que ponen en peligro uno de los pilares fundamentales de su política de "seguridad democrática": la negación del conflicto y, por tanto, la implicación de todos y todos los colombianos en la lucha contra el terrorismo. Desde el Gobierno se ha puesto en marcha un

plan de cercamiento de estas comunidades que abarca desde detenciones arbitrarias y procesos judiciales infundados contra sus miembros o acompañantes hasta crímenes selectivos y masacres.

CRIMENES IMPUNES. La penúltima masacre ocurrió el 21 de febrero de 2005 en San José de Apartado, un pequeño pueblo donde se creó en 1997 la primera comunidad de paz de Colombia. Ese día, numerosos testigos afirman que un grupo de soldados torturaron y ejecutaron salvajemente a ocho miembros de la comunidad. Poco después la policía instaló un cuartel en San José y la comunidad construyó un nuevo pueblo donde no hay presencia de grupos armados, San Josécito. Desde su constitución, la comunidad ha sufrido unas 600 agresiones, incluidos 170 asesinatos y desapariciones, la inmensa mayoría de ellas a manos del Ejército y los paramilitares (a la guerrilla se le atribuyen 20 asesinatos). En ningún caso se condenó a los culpables lo que permite que puedan volver a suceder hechos semejantes.

En Urabá, la misma región donde está San José, existen otras dos comunidades en resistencia: las comunidades de la cuenca del río Cacarica y las de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. La región de Urabá, en el noroeste, se caracteriza por la fertilidad de sus tierras -es la segunda región del mundo en biodiversidad, con grandes bosques nativos, oro, petróleo, carbón, uranio...- y porque es paso obligatorio para el contrabando de armas y narcóticos con Centroamérica, lo que ha provocado la disputa por su control de todos los grupos armados. A esto se añade el interés del Estado colombiano y empresarios en despejar la zona para llevar a cabo varios megaproyectos: un canal interoceánico que compita con el de Panamá, la prolongación de la carretera panamericana y la extensión de monocultivos como la hoja de palma africana. Hasta la segunda mitad de los 90 la violencia política provocaba unas 2.000 muertes al año en Urabá, pero a partir de 1997 el Ejército, en estrecha coordinación con los paramilitares, puso en marcha la Operación Génesis con la que el general Rito Alejo del Río pacificó la región a sangre y fuego: se han documentado más de 200 casos de crímenes de lesa humanidad desde el inicio de ese operativo militar. Todos siguen impunes mientras el Gobierno español sigue respaldando la política de "seguridad democrática" de Uribe Vélez.

Desde su constitución, la comunidad de San José ha sufrido unas 600 agresiones, incluidos 170 asesinatos y desapariciones, la mayoría de ellas a manos del Ejército y los paramilitares

Un campesino arrastra su canoa por el territorio colectivo del Cacarica.

FOTO: BETTY UDESEN

